

EDITORIAL

Ahora que se empieza a calmar el clima álgido generado por el proceso electoral, el país entero vuelve sus ojos no sólo hacia el nuevo régimen demócrata cristiano surgido de la contienda, sino también, hacia la cruda realidad de su cotidianidad: una guerra civil que continúa, una crisis económica que se agudiza y una tensa situación regional que amenaza desembocar en una conflagración mayor de impredecibles consecuencias.

Decir que nada ha cambiado y que nada ha pasado después del 6 de mayo, al igual que pretender creer que de hoy en adelante todo puede encontrar su justa solución, es simplificar demasiado un complejo panorama de fuerzas que interactúan en El Salvador.

Si bien se puede afirmar que las elecciones estuvieron condicionadas por distintos factores, es indudable que hubo participación ciudadana muy importante y que los indicios de un fraude, tal como se realizaba en el pasado, no parecen haberse dado, aunque no por esto el proceso haya estado exento de fuertes irregularidades. Ciertamente, una de las cuestiones básicas del proceso electoral que se ha vivido, radica en verificar si las elecciones han tenido plena validez democrática. Sin embargo, en las actuales circunstancias, interesa más comprender primero, si existe la claridad y la voluntad política en el nuevo gobierno por detectar cuáles son las tareas prioritarias y más urgentes para solucionar la problemática nacional y, segundo, si el nuevo régimen demócrata cristiano ha obtenido la legitimidad interna y externa necesarias, así como el poder suficiente para poder implementar sus planes de gobierno.

Ambas preguntas se relacionan íntimamente y, de la forma con que se aborde cada una de ellas, dependerá si el proceso electoral (cuyo costo monetario se estima en más de 49 millones de colones, amén de todo lo gastado por los partidos políticos en movilización y propaganda) tenga verdadera significación y repercusión en la vida de todo un pueblo que está sediento de paz, de Justicia social y de que se ponga fin a las arbitrariedades que han sido la norma de conducta de quienes han detentado el poder durante los últimos decenios.

Indiscutiblemente, el proceso electoral en sí, y la llegada al poder del Ing. Duarte, han despertado amplias expectativas en diversos sectores al interior y fuera del país sobre las posibilidades de cambios significativos que puedan darse en distintos planos de la vida nacional. Pero, no debe olvidarse que aún existen serios obstáculos para que estas expectativas puedan traducirse en acciones concretas y decididas. Parte de estos obstáculos se encuentran en el poder real que siguen teniendo los sectores más conservadores y oligárquicos del país; en el poder que realmente tiene la FA sobre las cuestiones que están al fondo de la problemática nacional; en las mismas divisiones al interior de la DC respecto a cómo encarar la crisis nacional; y en el gobierno norteamericano que no se termina de definir respecto a su política hacia Centroamérica en general, y El Salvador en particular.

En este sentido, la reflexión acerca del papel que ha asumido, asume y asumirá EUA en todos los ámbitos del proceso que vive el país se torna de vital importancia. El apoyo de Washington al nuevo gobierno y las directrices que de ahí emanan pueden ser fundamentales y decisivas para acortar o alargar los espacios temporales en la búsqueda de una solución racional, pacífica y lógica al conflicto salvadoreño. Si bien no es el único elemento determinante, la actitud que adopte Washington puede potenciar la posibilidad de los cambios profundos en las estructuras económicas, sociales y políticas que necesita el país. De ahí, la necesidad de mostrar los vicios que poseen una serie de instancias y documentos definitorios de la política exterior de EUA hacia El Salvador, tanto desde la perspectiva de los análisis que hacen, así como de las recomendaciones de índole socio-económicos que proponen.

La contradicción diagnóstico-recomendación del Informe Kissinger.

La necesidad de efectuar cambios socio-económicos y políticos de El Salvador es un hecho que ha sido reconocido pública y explícitamente a nivel de la comunidad internacional en general, y de algunos sectores de los EUA en particular. Sin embargo, en múltiples ocasiones, sobre todo a nivel del gobierno norteamericano, estos reconocimientos vienen acompañados de posiciones reminiscentes del pasado que, consecuentemente, se traducen en planteamientos y políticas contradictorias e incongruentes con las verdaderas necesidades regionales y nacionales.

Uno de los ejemplos más elocuentes que pueden citarse en esta dirección es el Informe elaborado por la Comisión Kissinger. El análisis de este Informe es de suma importancia pues se ha constituido en el texto doctrinario desde el cual, Washington pretende justificar y estructurar toda la ayuda económica y militar hacia El Salvador en los próximos años. Es más, el nuevo gobierno salvadoreño parece aceptar que su futuro desenvolvimiento socio-económico estará fuertemente determinado y orientado de acuerdo a los criterios del Informe y al aprovechamiento que pueda hacerse de la ayuda económica de \$800 millones que se recomienda para el país.

El diagnóstico relativamente correcto sobre los orígenes de la crisis regional, y salvadoreña en particular, se desvirtúa por medio de una serie de argumentos doctrinarios que, en tanto ubican los problemas y convulsiones de la región en el marco global de la confrontación de EUA con la URSS, empañan y hacen olvidar las verdaderas causas y remiten a soluciones estrictamente militares que para su implementación requieren de alianzas con aquellos agentes sociales al interior del país que históricamente han sido los responsables directos de la crisis y que tradicionalmente se han opuesto a todo intento de cambio.

Además, la priorización de las soluciones militares sobre los cambios estructurales supone la eliminación de los sectores insurgentes y la restricción de aquellos sectores no insurgentes pero que abogan por cambios, postergando para un futuro indeterminado, la eliminación de las causas de la insurgencia.

El aferramiento del Informe a un liberalismo económico a

ultranza que sostiene como artículo de fe que todo el proceso económico es o debe ser fruto de las actividades de la empresa privada, entendida ésta como un todo homogéneo, se traduce en las recomendaciones y en la práctica, en una defensa y fortalecimiento de la gran empresa y el gran capital y reducen al estado a un papel de incentivador y de estimulador de la actividad privada, dejando en manos de ella la racionalidad que debe orientar el proceso económico.

Las recomendaciones que emergen del Informe, y más concretamente, las políticas económicas sugeridas por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) al gobierno salvadoreño son incongruentes con el diagnóstico y de dudosa eficacia para lograr los objetivos declarados. Si bien en el plano general el Informe parece recomendar la adopción de una estrategia de crecimiento con equidad que priorice la atención en problemas relacionados con las necesidades básicas, el desempleo, la distribución y la pobreza, en el plano concreto carece de recomendaciones respecto a las reformas estructurales, a los agentes encargados del cambio y a las formas como se habrá de enfrentar a las fuerzas que tradicionalmente han defendido el *status quo*. Así, la ejecución de cualquier intento de redefinición de la estrategia de desarrollo parece posponerse para un mañana indefinido y los cambios estructurales parecen ser tareas posteriores a esfuerzos delineados con bastante precisión y claridad sobre la "pacificación militar" y la estabilización a corto plazo.

Por ejemplo, en el plano de las políticas concretas de estabilización a corto plazo, la AID viene presionando al nuevo gobierno para que proceda a una devaluación del colón de aproximadamente el 60.0%, arguyendo que un ajuste en la tasa de cambios no se puede posponer indefinidamente. Sin ignorar los serios problemas de balanza de pagos que sufre la economía salvadoreña, es iluso o medida de autoengaño por parte de AID, creer que se van a corregir estos problemas con una medida de devaluación, ignorando que las verdaderas causas del descalabro económico general del país es la guerra misma. AID parece creer que los mayores ingresos obtenidos por los empresarios vinculados a la exportación pudieran traducirse en mayores volúmenes de inversiones internas y contrarrestar así las caídas del Producto Interno Bruto. Sin embargo, es contradictorio con los mismos planteamientos políticos de la AID, del Informe Kissinger, y en general del gobierno Reagan que, medidas de esta envergadura se intenten

imponer al gobierno salvadoreño sin que éste por el momento, tenga listos planes de contingencia que puedan minimizar los efectos negativos que una devaluación traería sobre los sectores medios y populares. Más bien parece que los verdaderos propósitos y preocupaciones que hay detrás de tal medida es la compra de la lealtad política de los poderosos sectores agroexportadores para no boicotear y desestabilizar al nuevo gobierno demoócrata-cristiano.

Si en el plano económico se postergan las soluciones reales a la crisis, en el plano militar es obvio que la escalada regional que lleva a cabo EUA tampoco sugiere un cambio de la política exterior norteamericana que renuncie a insistir en priorizar la victoria militar sobre los insurgentes salvadoreños y a la búsqueda de las alianzas políticas que potencien la posibilidad de lograrla.

El gobierno del Presidente Reagan parece haberse empeinado en cerrar las posibilidades de buscar nuevas fuerzas, sectores y agrupaciones sociales y políticas que puedan ser los llamados a co-realizar los cambios que necesita el país.

En los momentos que vive El Salvador, un cambio de política de EUA podría tener su primera instancia de prueba apoyando al nuevo régimen demócrata cristiano para que enfrente a los sectores oligárquicos, al mismo tiempo que deje de oponerse a un diálogo con las fuerzas insurgentes que pueda conducir a una reorganización de las estructuras económicas, políticas y sociales del país.

Sin embargo, a juzgar por las recomendaciones del Informe de la Comisión Kissinger; por las medidas de política económica que trata de impulsar AID; por las primeras expresiones públicas del Ing. Duarte al regreso de su visita a Washington y como nuevo mandatario de la República, se sugiere que lo que en el fondo se persigue es comprar al poder oligárquico. Se trata de fortalecer la fragilidad política del gobierno, haciéndole concesiones a la empresa privada y al gran capital inclusive, para que éstos logren recuperarse de las perturbaciones que el proceso de reformas iniciado en marzo de 1980, les hubiese causado.

Si de Washington depende en gran parte el poder real y la capacidad de acción que pueda tener internamente el gobierno salvadoreño, entonces, la continuación de esta política sugiere que la guerra seguirá profundizándose y prolongándose, subordinando el quehacer político y económico a las necesida-

des bélicas y postergando indefinidamente los cambios que necesita el país.

Así, mientras que la mayoría de naciones del mundo han visto en las elecciones una vía que pueda potenciar futuras salidas políticas al conflicto salvadoreño, a nivel de la Administración Reagan, no parecen ser más que un aval muy importante para poder establecer los mecanismos necesarios para llevar adelante su política hacia Centroamérica, especialmente en la búsqueda de la derrota militar del FDR-FMLN. En este sentido, las elecciones, aunque parecen haber sido un ejercicio de democracia muy importante, no tendrán verdadera significancia. Mientras no abran un nuevo sendero para el pueblo salvadoreño, su validez democrática seguirá siendo una mera expectativa: su verdadera dimensión se encuentra en lo que pueden llegar a ser, no en lo que fueron.

San Salvador, junio de 1984.